

ROSA MENESES ARANDA

La amenaza del radicalismo islámico en Asia

A medida que se prolonga la ofensiva estadounidense contra Afganistán, los Gobiernos de los países vecinos apuntalan su poder por temor a que crezcan el extremismo y la inestabilidad en su interior. La crisis en Afganistán influye más directamente en la política interna del vecino Pakistán. Su Gobierno ha de intentar conjugar las protestas antiestadounidenses con el apoyo que el presidente, Pervez Musharraf, brinda a Washington. Las Repúblicas de Asia Central también temen que una ola de radicalismo islámico se filtre en su territorio y se han apresurado a pedir la protección de Rusia y de EEUU. A kilómetros de distancia del escenario de la operación Libertad Duradera, en el mayor país musulmán del mundo, Indonesia, las manifestaciones casi diarias de militantes islamistas hacen tambalearse al régimen de Megawati Sukarnoputri.

Rosa Meneses Aranda es periodista y experta en Información Internacional y Países del Sur

Tradicional aliado de los talibán afganos, Pakistán se vio el pasado septiembre en la obligación de elegir entre arriesgarse a sufrir la misma suerte que Afganistán por apoyar al terrorismo, o aliarse con EEUU. Aunque la mayoría de los paquistaníes está con el régimen de Kabul, el presidente Musharraf decidió unirse a Washington en su cruzada antiterrorista, beneficiándose así de ventajas económicas y políticas. Para facilitar las cosas, el general Musharraf purgó la jerarquía de las Fuerzas Armadas paquistaníes de simpatizantes protalibán. Con ello, Musharraf lograba consolidar su poder, pero el mayor desafío al que se enfrenta el régimen son las manifestaciones, cada vez más violentas, de apoyo al Gobierno afgano. Los islamistas se han hecho fuertes en la calle y han logrado movilizar a miles de seguidores para luchar del lado de los talibán, aunque en el Parlamento todos los partidos de esta índole sólo suman el 5% de los escaños.¹

¹ *Al Watan al Arabi*, octubre de 2001.

Si Islamabad logra contener la radicalización de su sociedad, no hay duda de que el país saldrá fortalecido, interna y externamente, después de la campaña afgana. De momento, se pueden ver algunos beneficios derivados de su alineamiento con EEUU. El Fondo Monetario Internacional (FMI) va a conceder nuevos créditos a Pakistán; Washington destinará 379 millones de dólares en forma de ayuda bilateral y, junto a Japón, ha decidido levantar las sanciones impuestas al país en 1998 por llevar a cabo ensayos nucleares. El presidente estadounidense, George Bush, está dispuesto incluso a olvidar que el general Musharraf accedió al poder gracias a un golpe de Estado, en 1999, tras el que EEUU impuso sanciones a Islamabad. Ahora, Musharraf es el mayor aliado de Bush en la zona. Pero el principal objetivo que persigue Pakistán es arrancar a la India el control de Cachemira.

La disputa entre la India y Pakistán sobre Cachemira data de 1947 y ha ocasionado dos guerras entre ambos países. Desde 1989 operan en la región varios grupos insurgentes que luchan por la autodeterminación de Cachemira.² La actual campaña estadounidense contra Afganistán ha tenido como consecuencia la reanudación de la violencia en esta región. El episodio más sangriento fue la muerte de 40 personas en Srinagar, el pasado octubre, como consecuencia de la explosión de un coche bomba.

La violencia en Cachemira amenaza a la coalición antiterrorista que lidera EEUU y de la que tanto la India como Pakistán forman parte. Ambas son potencias nucleares que se han negado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado para la Prohibición de Pruebas Nucleares. Teniendo en cuenta este hecho y ante el recrudecimiento de la violencia, resurge el peligro de que pueda estallar una guerra nuclear entre los dos países por la cuestión cachemir.³ Mientras, la India apela a EEUU a que extienda a Cachemira su lucha contra el terrorismo. Aprovechando la operación antiterrorista de Bush, el Gobierno indio ha acusado a Pakistán de financiar a los grupos terroristas que operan en la zona y ha afirmado que en las montañas cachemires se esconden campos de entrenamiento. Islamabad niega estas acusaciones e incluso ha condenado los recientes atentados. Pero lo cierto es que ahora EEUU se ve forzado a prestar más atención a la cuestión cachemir y a mediar para resolver la disputa. El Gobierno de Pakistán es el mejor situado de cara a una intervención de la diplomacia estadounidense para dar con una solución al problema de Cachemira.

Jaque a los Gobiernos de Asia Central

Con la llegada de los talibán al poder, en 1996, toda la región se vio sacudida por un radicalismo islámico sin precedentes. Los países vecinos trataron de paliar los riesgos de contagio apoyando a la Alianza del Norte que dirigía Ahmad Shah Massud.

² Los principales grupos rebeldes son: Hizb ul Muyahidin, Lashkar e Toyeba, Harakat ul Muyahidin y Yaish e Muhammad.

³ Esta posibilidad ha sido señalada estos días por algunos medios de comunicación (*BBC News*, 29 de octubre de 2001), pero ya fue apuntada por la CIA en 2000, durante una escalada de violencia en la región (*El Mundo*, 26 de agosto de 2000).

Así lo hicieron Irán, Turquía, India, Rusia y cuatro de las cinco Repúblicas ex soviéticas de Asia Central —Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán—. ⁴ Su posición actual frente a la campaña afgana es, pues, coherente con el foco de desestabilización que los talibán representan para estos países.

Asia Central constituye una importante región por su ubicación estratégica, adyacente a potencias nucleares como Rusia, China, India y Pakistán. Su relevancia es también económica, pues allí se encuentran enormes reservas de petróleo y de gas natural, aún sin explotar. Estos recursos energéticos han provocado una batalla entre las potencias regionales y las grandes compañías petroleras internacionales para controlar los gasoductos y oleoductos que han de transportar estas riquezas hacia Europa y Asia. Tras la caída de la Unión Soviética, Rusia, China y los movimientos islamistas con base en Afganistán y Pakistán se disputaban la influencia en esta zona bajo la atenta mirada de EEUU. Rusia y China trataban, hasta hace tan sólo unos meses, de establecer su liderazgo en la región para ser ellos quienes definieran las reglas bajo las que permitirían la participación de EEUU, la Unión Europea, Irán y Turquía. Ahora, con la campaña en Afganistán esta lucha parece intensificarse.

Tras los bombardeos contra el régimen talibán, EEUU toma las riendas del poder en la región. La instauración de un Gobierno de coalición en Kabul, presidido por el ex monarca afgano Zahir, permitirá a Washington echar abajo los proyectos de Moscú y Pekín para establecer una esfera de influencia en el área. Con el derrocamiento de los talibán, EEUU conseguirá impedir la expansión del integrismo en Asia Central y reducir el tráfico de drogas. Pero lo más importante es que obtendrá un aumento de su influencia política, que le permitirá asegurarse el acceso de sus compañías al control de los ricos yacimientos de petróleo y gas natural del mar Caspio.

Pero, a pesar de que actualmente existe una mayor presencia militar de EEUU en el área —o precisamente por ello—, cada vez cobra más fuerza el peligro de una insurrección radical musulmana en las Repúblicas de Asia Central. Su explosiva situación interior puede dar cuenta de ello. Los regímenes que gobiernan estas Repúblicas, tradicionalmente en la órbita de Rusia, presentan una acusada falta de legitimidad entre su población. Son Gobiernos no democráticos dominados por la corrupción, que imponen a sus ciudadanos niveles de vida muy bajos. Todas estas condiciones abonan el terreno al radicalismo islámico. Su mayor exponente en la zona es el régimen talibán, por lo que muchos de estos países se han sentido amenazados, de una forma u otra, por el ataque estadounidense contra Afganistán. Unos han cedido su territorio a las tropas de EEUU, mientras otros vuelven sus ojos a Rusia en busca de protección. Políticamente, dichas Repúblicas tienen en común que están gobernadas desde su independencia por las élites de la era soviética. En algunos casos, como los de Uzbekistán o Turkmenistán, sus líderes han ignorado por completo las reformas democráticas, mientras que en otros, los pequeños intentos de cambio en el sistema económico han acabado por favorecer

*Tras los
bombardeos
contra el
régimen
talibán,
EEUU toma
las riendas
del poder
en la región*

⁴ Ahmed Rashid, *Los talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo "Gran Juego" en Asia Central*, Ediciones Península, Barcelona, 2001.

la corrupción y la falta de transparencia. La pérdida de credibilidad entre la población obliga a sus gobernantes a profundizar en sus métodos autoritarios para permanecer en el poder.

Respecto a la economía, en Asia Central hay países con importantes riquezas, como Kazajistán o Turkmenistán, que poseen grandes reservas de petróleo y gas natural en sus yacimientos del mar Caspio. Sin embargo, en ellos la distribución de la riqueza es muy desigual: la mayoría de la población vive sumida en el subdesarrollo mientras sus gobernantes, sus familias y sus aliados disfrutan de los grandes beneficios de la explotación de las riquezas del país. La situación más desesperada la viven las gentes de Kirguistán y Tayikistán, devastadas por la sequía y el hambre. La única solución es el tráfico de drogas u otras actividades ilícitas.

El régimen de Saparmurad Niyazov, en Turkmenistán, está catalogado como el más opresivo de la región. El grado de represión aplicado a los disidentes demuestra que se trata de una dictadura totalitaria en toda regla. Presidente de la República desde su independencia de la URSS, en 1991, Niyazov fue proclamado por el Parlamento como presidente vitalicio. Sus opositores viven constantemente acosados e incluso son encarcelados durante largos periodos. Las minorías religiosas, como la cristiana, son también víctimas de la persecución del régimen. La fuerte censura impide la existencia de medios de comunicación independientes. Su disputa con Azerbaiyán por dos campos petrolíferos en el Caspio ha llevado a Ashjabad a firmar contratos con Rusia, Ucrania, Georgia y EEUU para adquirir material militar.

En el Uzbekistán de Islam Karimov la situación no es mucho mejor. Hasta hace unas semanas, el Gobierno de Karimov confiaba en Rusia y China para salvaguardar su poder. Las amenazas de organizaciones radicales musulmanas en sus fronteras provocaban continuas hostilidades que desestabilizaban cada vez más al régimen. La actual campaña de EEUU contra Afganistán ha hecho cambiar de estrategia a Karimov, que decidió prestar a EEUU sus instalaciones militares, el pasado septiembre, a cambio de ayuda económica y militar. El presidente ha visto en los estadounidenses una oportunidad para afianzar su Gobierno frente a sus opositores. Estos están excluidos del juego político y son víctimas de una incansable persecución que se verá intensificada a raíz de la situación internacional actual. Se calcula que las cárceles uzbecas acogen a entre 15.000 y 30.000 presos políticos y activistas religiosos.⁵ Las organizaciones pro-derechos humanos locales y occidentales denuncian que la tortura está generalizada, a pesar de que Tashkent es signatario de la convención internacional que la prohíbe. La libertad religiosa se ve también fuertemente restringida, siendo los musulmanes —comunidad religiosa que representa un 88% entre los uzbecos— los más perseguidos, según afirma un documento del Departamento de Estado estadounidense.⁶ Alrededor del 80% de las mezquitas del país han sido cerradas.

⁵ *US Foreign Policy Interests and Human Rights in Central Asia*, Heritage Foundation, 18 de julio de 2001.

⁶ *El País*, 1 de octubre de 2001.

La persecución contra los militantes islamistas data de los primeros años de la independencia del país, en 1991. Fue incrementada a raíz del atentado terrorista contra el presidente Karimov, en febrero de 1999, que provocó decenas de muertos en la capital uzbeca. Las autoridades culparon de la acción al Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), sus dirigentes fueron condenados a muerte en ausencia y se cree que hoy se encuentran con los talibán. En estos momentos, todas las previsiones apuntan a que el régimen endurecerá la persecución contra los islamistas para tratar de impedir que el auge del integrismo en la región desestabilice seriamente la situación interna del país. El MIU denuncia que Karimov les ha cerrado todas las vías para insertarse en el sistema político uzbeko y afirma que ésta es la razón por la que miles de jóvenes islamistas del país han marchado a Afganistán para luchar del lado talibán.

Kazajistán también aplica la mano dura contra los opositores al régimen. Toda información sobre el presidente y su familia es, por ley, secreto de Estado. El Parlamento garantizó al presidente, Nursultán Nazarbayev, la inmunidad para cualquier crimen cometido mientras ejerciera el poder, con la excepción de la alta traición. En 1998, el Parlamento amplió el mandato del presidente de 5 a 7 años, abolió el límite de dos legislaturas y el límite de edad de los candidatos fijado en los 65 años. Estas medidas permitirían a Nazarbayev, en la presidencia desde 1991, ocupar el poder más allá del año 2006. Esta hipótesis ya quedó demostrada cuando, en las elecciones presidenciales de enero de 1999, Nazarbayev ganó con el 82% de los sufragios.

En Kirguistán y Tayikistán, algunas mejoras establecidas en la mitad de la década de 1990 han sido seguidas por el deterioro político del régimen, así como de la justicia y de la libertad de prensa. La pésima situación económica de Kirguistán favorece el desarrollo de una economía paralela en torno a la droga procedente de Afganistán. Mientras, la ayuda internacional ocupa un lugar significativo en los ingresos del país. La situación interna de Tayikistán se ve amenazada por el incremento de la influencia de las mafias y por el resurgimiento de una oposición armada al régimen de Imamali Rahmanov. Esta última idea acrecienta el miedo a que el conflicto se extienda a Tayikistán, que ya vivió una guerra civil entre el Gobierno neocomunista y los islamistas entre 1992 y 1996. El Acuerdo de Paz de 1997 puso fin al enfrentamiento, pero una facción disidente ha rechazado este pacto. En el país permanece un contingente de 25.000 soldados rusos.⁷ Dushanbé apoya tradicionalmente a la Alianza del Norte en Afganistán y mantiene una fuerte rivalidad con Uzbekistán, al que acusa de amenazar su independencia. Estas tendencias políticas opuestas pueden desencadenar tensiones entre un Tayikistán pro-ruso y un Uzbekistán pro-occidental, tras la campaña estadounidense en Afganistán.

En la medida en que Rusia y China aspiran a ejercer su liderazgo en Asia Central, las oportunidades para democratizar la región son pocas. Sin embargo, EEUU y la UE también han fracasado en su esfuerzo de llevar a los líderes de las repúblicas ex soviéticas nuevos aires de democracia que hubieran procurado más respeto a los derechos humanos, al tiempo que podrían haber ayudado a construir economías más atractivas a la inversión extranjera. La campaña en Afganistán

*La pésima
situación
económica de
Kirguistán
favorece el
desarrollo de
una economía
paralela en
torno a la
droga
procedente de
Afganistán*

⁷ *Amanecer del nuevo siglo*, octubre de 2001, Nº 124.

—que puede acabar con el establecimiento de un Gobierno pro-occidental en Kabul y con el aumento de la presencia militar estadounidense en la zona—, lejos de acercar a los Gobiernos de la región a la apertura democrática, les da nuevas razones para endurecerse y para seguir acallando las voces discordantes. Mientras, el descontento social en cada uno de estos países hace que el peligro de un levantamiento contra estos regímenes sea cada vez más real.

Riesgo de ruptura social en Indonesia

Indonesia es un ejemplo paradigmático de cómo la campaña contra el terrorismo islámico emprendida por EEUU puede influir en la situación interna de un país a miles de kilómetros del frente de Afganistán. En el mayor Estado musulmán del mundo se desarrollan protestas casi diarias desde que EEUU lanzó sus ataques contra el régimen de Kabul. A finales de octubre, el vicepresidente indonesio, Hamza Haz, llamó al cese de las manifestaciones antiestadounidenses y advirtió del riesgo de una crisis económica si los inversores extranjeros se veían influidos o asustados por las protestas. Haz llegó al punto de pedir a EEUU que parase los bombardeos aéreos, lo que pone en evidencia la grave fragilidad de Indonesia ante esta campaña. Desde el comienzo de la operación Libertad Duradera, el Gobierno indonesio ha respaldado a Washington, pero se ha mostrado preocupado por las bajas civiles. Es consciente de que la estabilidad del país está en juego, en la medida en que los indonesios no aprueban un ataque contra otro país musulmán.

Las autoridades indonesias están muy preocupadas ante un inminente descenso de la inversión extranjera y del turismo. De hecho, algunos operadores turísticos afirman que están al borde de la quiebra, mientras la rupia se debilita. Los fantasmas de la crisis que sacudió Indonesia en 1997 toman forma de nuevo. Y con más razón si tenemos en cuenta que Yakarta aún se está recuperando de aquel *crack* que le costó el puesto a Suharto, acabó con su prometedora bonanza económica y dejó aflorar los problemas sociopolíticos que se escondían tras ella. En septiembre —justo antes de los atentados contra Nueva York y Washington—, el FMI decidió reanudar la concesión de créditos a Indonesia en vista de las reformas emprendidas por el Gobierno. El mayor reto económico es ahora conseguir una inflación por debajo del 10%, teniendo en cuenta que en julio la tasa alcanzaba el 13% —en 1998, en plena crisis, la inflación rozaba el 80%—.

El riesgo de ruptura económica y social en Indonesia es tal que la propia presidenta del país, Megawati Sukarnoputri, rompió por primera vez su silencio a mediados de octubre para criticar a EEUU. Sukarnoputri afirmó que ningún Gobierno tiene el derecho de atacar a otro o de buscar lavar su sangre con sangre. La presidenta es consciente de que Indonesia es una bomba de relojería: en ella conviven 300 grupos étnicos divididos en cinco religiones. El 87% de la población es musulmana, frente al 10% que se confiesa cristiana. El 70% de la economía nacional está controlada por los chinos, que constituyen apenas el 3% de la población.⁸

⁸ Tamara Osorio Díaz, “¿Indonesia desintegrada?”, *Anuario CIP 1999. Guerras en el sistema mundial*, Icaria Editorial, Barcelona, 1999.

Mientras, el Frente de los Defensores del Islam amenaza con expulsar del país a los occidentales. Estas proclamas avivan el fuego separatista musulmán en las provincias de Aceh e Irian Jaya, y podrían despertar otros frentes abiertos de violencia intercomunitaria: Borneo y Ambon. A finales de octubre tenían lugar en Aceh —al norte de la isla de Sumatra— nuevos capítulos de violencia, causando la muerte de rebeldes y civiles que no hacían sino empeorar las negociaciones entre el Movimiento Aceh Libre (GAM, en sus siglas en bahasa) y el Gobierno para tratar de acordar una tregua definitiva al conflicto, el cual data de 1976. En lo que va de año, los enfrentamientos en esta provincia rica en petróleo y gas han causado más de 1.200 muertos, la mayoría de ellos civiles. La reanudación del conflicto separatista de Aceh pone en jaque el estatuto de autonomía aprobado el pasado julio por el Parlamento indonesio. Según este marco, los tribunales de la provincia podrán juzgar a través de la ley islámica —*sharia*— aquellos asuntos en los que sólo estén implicados musulmanes. También concede a la administración local la gestión del 80% de los ingresos generados por el petróleo y gas de la provincia. Si la violencia vuelve a generalizarse en la zona, de nada servirán estas concesiones ni los gestos del Gobierno de Sukarnoputri, que había pedido perdón a Aceh por los errores y abusos contra los derechos humanos de los anteriores ejecutivos.

Irian Jaya es otro foco de peligro que puede verse avivado por las protestas contra los bombardeos de EEUU en Afganistán. Los esfuerzos de Sukarnoputri de otorgar una carta que conceda a la provincia mayor autonomía se han visto rechazados por los rebeldes del Movimiento Papua Libre. La ley esperaba acabar con 40 años de lucha separatista en la parte oeste de la isla de Nueva Guinea, mediante la concesión de la gestión del 80% de las riquezas pesqueras, del 70% de las riquezas mineras y de las reservas de gas natural y petróleo de la provincia. También promovía la creación de un consejo popular para preservar los derechos de los nativos. Los rebeldes rechazan este marco y reivindican la independencia total de Papua Occidental.

El sentimiento de desigual reparto que hace Yakarta de los recursos locales, y la falta de reconocimiento de las identidades culturales indígenas que encontramos en la raíz de los conflictos separatistas de Aceh y de Irian Jaya lo contemplamos también en Kalimantan (Borneo). Allí se desarrollan cotidianos enfrentamientos entre los colonos madureses (musulmanes) y los dayaks (animistas cristianizados), los nativos marginados. Fue entre enero y abril de 1999 cuando este conflicto vivió días de extrema violencia. Otro frente, hoy en estado latente, es el de Ambon, en las Islas Molucas, escenario también de graves choques entre comunidades.

Todos estos focos de violencia tienen en común el resentimiento acumulado contra Yakarta, acusada de saquear los recursos naturales del país. La excesiva centralización de Indonesia, que podría acentuarse tras los acontecimientos del 11 de septiembre y las protestas antioccidentales, son una amenaza en un Estado pluriétnico. A ello hay que añadir la mala situación económica del país. Las grandes bolsas de pobreza que acusa —la mitad de la población vive bajo el umbral de pobreza— son un terreno fértil para el extremismo islámico, a pesar de la fama que Indonesia se ha labrado como fuerza moderada del mundo musulmán. Para paliar la radicalización de la población y evitar la violencia interétnica es necesaria una reforma profunda del sistema político y económico, y así dar voz e integrar a las distintas comunidades que conforman el archipiélago.